

Presente y futuro de la Arqueología en Andalucía

Reflexionar sobre el futuro de la arqueología requiere el análisis, aunque sea de forma breve, de la encrucijada en la que actualmente se encuentra nuestra disciplina, sometida a una realidad en permanente cambio. Hace tan solo un par de décadas hubiera sido casi inimaginable que la arqueología se convirtiera en una profesión con la proyección laboral que ha tenido en estos últimos años, gracias al exponencial desarrollo de la denominada arqueología de gestión, empresarial o comercial. Esta situación incluso ha suscitado el interés de disciplinas afines a la arqueología por acceder a este mercado laboral. Al menos en Andalucía, desde ámbitos relacionados con áreas de conocimiento bastante diversas, que van desde el Patrimonio Histórico-Artístico a las Ciencias de la Tierra, se ha reivindicado activamente, aunque sin éxito, su participación en las normativas y reglamentos que ordenan la actividad arqueológica.

La situación actual de la arqueología en Andalucía obviamente comparte con otros territorios del estado español toda una serie de elementos comparables que sin duda permiten una reflexión común como la que nos propone Jaime Almansa. No obstante, la transferencia a mediados de los años 80 de las competencias en materia de patrimonio a las Comunidades Autónomas ha creado trayectorias divergentes con particularidades propias. Veamos cuáles son algunos de estos elementos comunes y específicos. Como en el resto de las Comunidades, los actores principales que intervienen en el patrimonio arqueológico son, por una parte, la administración autonómica encargada de la tutela en sus diferentes acciones de conservación, investigación, protección, difusión etc.; por otra las empresas, cooperativas o profesionales autónomos y finalmente los centros de investigación, especialmente las universidades.

La administración autonómica andaluza ha conseguido crear en sus 25 años de historia un complejo organigrama de organismos

e instituciones relacionados con la tutela de los bienes arqueológicos y, lo que probablemente sea más relevante, en la actualidad cuenta con unos recursos humanos altamente cualificados, aunque probablemente insuficientes. La preocupación por la tutela de los bienes patrimoniales ha estado siempre presente en la agenda política de la administración andaluza. Especialmente en su primera etapa los éxitos del denominado “modelo andaluz de arqueología” han sido reconocidos tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, las políticas de protección y conservación han seguido siendo un referente para otras instituciones autonómicas. A partir de la segunda mitad de los años 90 la capacidad de liderazgo mostrada por la administración en la tutela de los bienes arqueológicos ha sufrido un estancamiento, cuando no un retroceso. No obstante, la importancia de los bienes culturales ha continuado siendo un activo importante en la acción política andaluza. En este sentido, y a pesar del duro momento de ajuste que viven las diferentes administraciones públicas, Andalucía ha mantenido una estructura administrativa de gestión patrimonial independiente de otros ámbitos de la vida pública.

El cambio probablemente más importante que se ha producido en estas dos últimas décadas ha sido la irrupción de la denominada *arqueología empresarial o comercial*. En Andalucía este fenómeno ha tenido una especial relevancia. Según un reciente estudio de Eva Parga-Dans, en el año 2008 Andalucía era la comunidad con mayor número de empresas de arqueología, 45, seguida de Cataluña y Madrid con 44 y 38, respectivamente, de un total de 273 empresas para todo el territorio nacional. Dentro del territorio andaluz, las provincias occidentales especialmente Sevilla, Málaga y Córdoba son las que concentran el mayor número de empresas, frente a Granada y Almería que ocupan el extremo opuesto. A esta importante actividad empresarial hay que sumar a los profesionales autónomos, sector para el que por el momento no existe ningún tipo de aproximación, pero cuya incidencia en la arqueología comercial parece ser igualmente relevante.

La importancia del mercado laboral, y su impacto socioeconómico, puede ser igualmente valorada a partir del volumen intervenciones arqueológicas realizadas en Andalucía. En

el periodo 2005-2010 la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía autorizó 5312 actividades arqueológicas, lo que supone una media cercana a las 900 intervenciones anuales (ver Tabla). Si de las 5312 intervenciones exceptuamos las 121 correspondientes a la categoría de Proyectos de Investigación, habitualmente desarrolladas por centros de investigación, especialmente universidades, nos quedan 5191 autorizaciones arqueológicas que formarían el volumen de trabajo realizado por los profesionales de la arqueología comercial en Andalucía. Resulta interesante que en el caso andaluz, y a diferencia de lo que sucede en otros ámbitos peninsulares, la incidencia de la crisis económica iniciada en 2007 ha sido bastante tardía. Sólo en 2010 se ha producido un descenso significativo en el número de autorizaciones. Si cruzamos la información de la actividad empresarial y el volumen de actividades arqueológicas realizadas en los últimos años, se obtiene la imagen de un importante mercado laboral que reúne a un colectivo de profesionales de varios cientos de arqueólogos y arqueólogas.

Año	Preventivas	Puntuales	Urgentes	Proyectos de Investigación	Impacto Ambiental	Total
2005	622	106	28	21		777
2006	706	98	15	29		848
2007	887	83	21	21		1012
2008	871	70	21	15		977
2009	855	67	9	17		949
2010	643	56	13	18	20	750
Total	4584	480	107	121	20	5312

Tabla: Actividades arqueológicas autorizadas en Andalucía entre los años 2005 y 2010 (Fuente: DGBBCC de la Junta de Andalucía)

Por su parte, los centros de investigación en Andalucía están compuestos básicamente por las universidades. Probablemente sean las instituciones que menos han evolucionado en los últimos años. En la actualidad existen 9 universidades en Andalucía, una por cada provincia, a excepción de Sevilla con dos, la centenaria Universidad de Sevilla y la de reciente creación Universidad Pablo de Olavide. El

colectivo de investigadores/as permanentes (Arqueología Prehistórica, Clásica y Medieval) asciende a unos 93 profesionales, a los que hay que sumar varias decenas entre investigadores/as predoctorales, postdoctorales, contratados en diferentes modalidades, etc¹.

Se trata de un exiguo colectivo con un claro desequilibrio territorial a favor de las universidades de Granada y Sevilla que concentran a más de la mitad de los arqueólogos/as. Desde la consolidación del sistema universitario andaluz a finales de los 80 y principios de los 90, las raquíticas plantillas de profesionales a duras penas han conseguido mantenerse sin que los programas de reincorporación de doctores, tanto nacionales (Ramón y Cajal y más recientemente Juan de la Cierva) como autonómicos (Programa de Reincorporación de Doctores a Centros de Investigación y Universidades de Andalucía), hayan conseguido variar sensiblemente esta situación.

Como acertadamente ha planteado Gonzalo Ruiz Zapatero, la situación de parálisis vivida en las últimas décadas en la promoción a los cuerpos docentes e investigadores universitarios ha provocado un empobrecimiento en la creatividad, empuje y estímulo crítico que aportarían las nuevas generaciones de arqueólogos/as. Además, las universidades han pasado en menos de 3 décadas de ser prácticamente los únicos agentes en la arqueología andaluza a una posición ciertamente compleja en donde otros ámbitos arqueológicos han conseguido un fuerte protagonismo. Esta nueva situación ha generado un cierto desconcierto y en algunas ocasiones no pocos recelos e incomprensiones.

Quizás sea este momento de dura crisis el más adecuado para reflexionar sobre el futuro de la arqueología andaluza a partir de un sosegado análisis de su realidad actual. En mi opinión, hay un elemento central en el que prácticamente coinciden todos los agentes implicados: la arqueología o pasa por la investigación o difícilmente es sostenible. La arqueología comercial ha generado un enorme volumen de documentación que apenas si se ha transformado en conocimiento más allá de los informes, en la mayoría de las ocasiones

¹ Información obtenida de las páginas webs de las 9 universidades andaluzas.

muy escuetos, publicados en los Anuarios Arqueológicos de Andalucía tal y como obliga la legislación vigente. Las empresas y arqueólogos autónomos han estado más preocupados por la viabilidad económica de su actividad profesional que por generar conocimiento histórico. Los centros de investigación tampoco se libran de este grave problema, ya que en no pocas ocasiones la documentación arqueológica conseguida en intensas campañas de excavaciones y prospecciones permanece inédita.

La realidad actual en mi opinión es peliaguda. Solo pensar en la potencial información histórica generada en las 5312 actividades arqueológicas realizadas en el periodo 2005-10 causa autentico vértigo. No obstante, creo que es posible construir un nuevo modelo en la gestión de los bienes arqueológicos a partir de una toma de conciencia de esta realidad y de la implicación activa de los actores implicados.

A la administración autonómica le corresponde un papel central en la construcción del futuro. Creo necesaria la recuperación de la capacidad de liderazgo mostrada en tiempos pasados. La nueva realidad requiere de una administración que actúe como eje vertebrador de nuevas políticas, encaminadas a construir una arqueología basada en el conocimiento que permita transferir a la sociedad de forma adecuada los valores culturales de nuestro patrimonio. Un aspecto que considero importante de esta acción política debería consistir en crear puentes por los que fluya la información, la crítica, la colaboración, los problemas, las dificultades o los aciertos, rompiendo la barrera del aislamiento, cuando no de incomprensión, que actualmente existe entre los diferentes agentes de la arqueología andaluza. La reflexión común y sincera creo que es la clave del futuro.

A las empresas de arqueología les queda un prometedor futuro aunque el *boom* inmobiliario y la posterior crisis económica probablemente marquen un punto de inflexión en su reciente historia. De hecho, en los últimos años algunas empresas andaluzas han comenzado a diversificar sus actividades ofreciendo servicios de valorización y difusión, conservación, formación, etc. El reto más

importante probablemente consista en compatibilizar la viabilidad económica con la generación de conocimientos históricos, el fomento de la investigación aplicada y la innovación. En este sentido, apenas si se han explorado las posibilidades de financiación que ofrecen tanto la Unión Europea como el Ministerio de Ciencia e Innovación a través de programas como el denominado Torres Quevedo para la contratación de doctores. Quizás uno de los obstáculos fundamentales para avanzar en este objetivo proceda de la estructura de las empresas de arqueología, caracterizada por su reducido tamaño y por la precariedad laboral. Cambios relevantes en la estructura y modelo productivo, apertura a la colaboración con otras instituciones y aprovechamiento de las líneas de financiación disponibles probablemente sean algunos de los más relevantes desafíos de la arqueología comercial.

A los centros de investigación y especialmente a las universidades les corresponde un proceso de autocrítica. La velocidad a la que se han producido los cambios quizás haya cogido a contrapié a estas centenarias instituciones. Probablemente la ausencia de renovación o ampliación de las plantillas de investigadores/as de estas últimas décadas tampoco haya contribuido a una mejor adaptación. Las universidades deben resituarse en el nuevo y complejo panorama de la arqueología andaluza haciendo valer una de sus principales características: su capacidad tanto para la innovación teórica y metodológica como para someter al juicio crítico de la comunidad científica internacional los avances, tanto en los procedimientos de trabajo como en la construcción de nuevos conocimientos históricos. Los primeros pasos ya han comenzado a darse, aunque limitados a la adaptación de los planes de estudio mediante másteres con clara orientación profesional. En mi opinión, una de las actuaciones más urgentes pasa por un profundo cambio en la forma y en las estructuras de la investigación arqueológica universitaria para adaptarse a la nueva realidad de la disciplina. La reflexión, colectiva y crítica, de nuevo se convierte en una exigencia ineludible.

Finalmente, en estos últimos años han emergido nuevos actores en el complejo y cambiante panorama de la arqueología andaluza. Se trata de importantes movimientos cívicos en defensa,

promoción y divulgación del patrimonio arqueológico, un fenómeno que en otros ámbitos europeos posee una considerable tradición pero que en Andalucía es novedoso. Este es el caso de la Mesa Ciudadana en defensa del Paisaje Protegido y del yacimiento de Valencina de la Concepción-Castilleja de Guzmán en Sevilla o de la Asociación Amigos de los Íberos de Jaén, dos movimientos ciudadanos muy activos con notables éxitos en la defensa y difusión de los bienes patrimoniales. La creciente conciencia ciudadana, que estos dos casos perfectamente ejemplifican, proyecta sobre el futuro un reto de incalculable valor, consistente en no defraudar las expectativas de una sociedad que comienza a demandar de forma activa y beligerante la protección, conocimiento, uso y disfrute de su pasado.

BIO

Gonzalo Aranda Jiménez es Profesor Titular de Universidad en el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada. Ha desarrollado diversas estancias de investigación en universidades extranjeras especialmente en Reino Unido. Sus líneas de investigación están relacionadas con el proceso de aparición y desarrollo de las sociedades jerarquizadas en la Prehistoria Reciente del sur de la Península Ibérica. De forma específica sus trabajos se han centrado en el estudio de las relaciones de identidad social a partir de la investigación de las prácticas rituales de consumo de alimentos y bebidas, de las formas de organización social de la producción y de la aparición y regulación de diferentes tipos conflictos interpersonales que impliquen el uso de la violencia. Actualmente dirige el grupo de investigación "GEA. Cultura material e identidad social en la Prehistoria Reciente del sur de la Península Ibérica" de la UGR. Asimismo es el investigador principal del proyecto de investigación del Plan Nacional I+D+i del Ministerio de Ciencia e Innovación titulado "El contexto social de consumo de alimentos y bebidas en las sociedades de la Prehistoria Reciente del sur peninsular". Forma parte del Consejo Editorial de la revista "Menga. Revista de Prehistoria de Andalucía" en calidad de editor científico.